

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA**

Pieza de Medidas Cautelares nº: 5 /000455/2016-

N.I.G: 46250-33-3-2016-0003312

Demandante/Recurrente: UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MARTIR"

Procurador/Ltrado: RICARDO MANUEL MARTIN PEREZ /

Demandado/Recurrido: CONSELLERIA DE EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y DEPORTE

A U T O

Ilustrísimos Señores

Presidente

Don FERNANDO NIETO MARTIN

Magistrados

Doña ROSARIO VIDAL MAS

Don EDILBERTO NARBON LAINEZ

En la ciudad de Valencia, a veintisiete de septiembre de 2016

Dada cuenta y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.-La parte actora en su escrito iniciador del presente expediente solicitó la suspensión del acto administrativo recurrido, por lo que se formó la oportuna pieza separada, seguida por sus trámites y que dio lugar al Auto de fecha 25.8.16 por el que se acordó la medida cautelar solicitada, contra el que se interpuso en tiempo y forma recurso de reposición del que se dio traslado a la parte contraria a fin de que manifestara lo que tuviera por conveniente.

FUNDAMENTACION JURIDICA

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contra el citado Auto por el que se concede la medida cautelar solicitada de suspensión de la Orden 21/2016 de 10 de junio de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana.

Las razones que sustentan el Auto son que se dan los requisitos exigidos en el artículo 130 de la LJCA para su adopción, por cuanto la vigencia de la Orden de la que dimana la Resolución impugnada impide el acceso al sistema de becas en el curso 2016/2017 de los alumnos que cursan estudios en las universidades privadas salvo que la resolución de convocatoria de becas lo contemple, por lo que la regulación normativa deja al albur de cada resolución de convocatoria la inclusión de los alumnos de universidades privadas.

En segundo lugar y en cuanto al *fumus boni iuris*, la diferencia en el trato no se ajusta *prima facie* a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con la LO 6/2001, y Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, así como el Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016, que incluye los estudios en las universidades privadas en las “becas de matrícula”, destacando igualmente el Dictamen negativo emitido por el Consell Jurídic Consultiu.

Finalmente se alude al criterio del *periculum in mora* y destaca el carácter irreversible del daño que puede producirse de la aplicación de la norma por la exclusión de alumnos amparados por el sistema de becas vigente al tiempo de la Orden impugnada y conforme a tales requisitos concluye acordando la medida cautelar interesada.

SEGUNDO.- Frente a esta resolución se alza en reposición la Administración demandada por entender que no se dan ninguna de las condiciones que han determinado la adopción de la resolución impugnada, ya que se trata de becas relativas al curso 2015-16, es decir, que se trata de cantidades económicas ya satisfechas por los interesados; estamos en presencia de una disposición general, respecto a los criterios relativos a la suspensión son más estrictos; no se afectan los derechos fundamentales invocados al efecto; es contrario a otras resoluciones de la propia Sala en casos similares y produce un grave perjuicio al interés general.

El Ministerio Fiscal solicita el mantenimiento de la resolución impugnada y también la demandante que rebate los argumentos expuestos anteriormente.

A la vista de todo ello debemos destacar, en términos ya resueltos por esta misma Sala y Sección de 13, 19 y 20 de este mismo mes y año en recursos similares al presente, por vía de petición inicial o de recurso de reposición contra la estimación inicial de la medida que las medidas cautelares tienen un distinto tratamiento, más restrictivo, cuando el objeto del procedimiento es una disposición de carácter general; en el presente caso, el supuesto de hecho que determina en estos casos la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, la nulidad por preexistencia de un pronunciamiento previo de los Tribunales, no se ha producido en este momento.

Siendo suficiente con estos argumentos para denegar la medida solicitada, debemos destacar que, a la vista de las alegaciones del solicitante, la primera de ellas –lesión de tres derechos fundamentales- incide directamente en el fondo del asunto, por lo que excede del ámbito de esta pieza de medidas cautelares; la segunda -contraviene la normativa vigente en materia de becas, ley Orgánica 6/2001, Tratados internacionales y normativa comunitaria, normativa básica estatal y la propia autonómica- es una cuestión de legalidad ordinaria que excede no ya del ámbito de esta pieza separada, sino de este procedimiento en su totalidad; la tercera -Resolución recurrida y Orden de que dimana suponen una quiebra radical del sistema de becas previamente aplicado durante años- se trata de nuevo de una cuestión de legalidad ordinaria respecto a la que es aplicable el mismo reproche del motivo anterior y por último, que supone la imposibilidad para los alumnos de esta universidad de continuar con sus estudios en el centro elegido, se trata de una invocación cuya generalidad impide que pueda ser acogida puesto que se trata de una cuestión que depende de muchas circunstancias, todas ellas personales, que deben ser alegadas con la concreción que requiere la valoración circunstanciada que hemos dicho anteriormente se exige para la adopción de cualquier medida cautelar, de la que derivará la distinta afectación que la aplicación de la norma supone para cada uno de los estudiantes y con ello se acreditaría quizá que alguno de ellos no pueda continuar sus estudios, hipótesis todas ellas que en absoluto han quedado evidenciadas en la alegación actora, misma respuesta que merece la alegación relativa a la pérdida de finalidad legítima del recurso.

En consecuencia de todo ello, procede estimar el recurso de reposición interpuesto revocando la medida adoptada y en su virtud denegar la misma.

A la vista de lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede hacer expresa imposición de costas.

LA SALA RESUELVE estimar el recurso de reposición interpuesto, dejando sin efecto el Auto recurrido y denegando la medida cautelar solicitada.

Este Auto no es firme y contra él cabe, conforme a lo establecido en los artículos 87.1 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Srs. anotados, lo que certifico.